



RESOLUCIÓN

En la Ciudad de México, a cinco de agosto de dos mil dieciséis. -----

VISTOS, para resolver en definitiva el expediente número **CI/SSP/D/056/2016** del que derivó el Procedimiento Administrativo Disciplinario a que se refiere el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, instruido en contra de la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, con Registro Federal de Contribuyentes número [REDACTED] quien en la época de los hechos, se desempeñaba como Directora de Organización y Normatividad, dependiente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, misma a la que le fue instruido el Procedimiento Administrativo correspondiente, por presunta transgresión a la obligación establecida en la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y -----

RESULTANDO

1. El diez de marzo de dos mil dieciséis, se recibió en esta Contraloría Interna copia certificada del oficio **SSP/OM/DERC/241/2016** de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, signado por la Maestra **HILDA ARACELI CHÁVEZ MEJÍA**, Directora Ejecutiva de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, mediante el cual remitió la relación de servidores públicos obligados a presentar la declaración de intereses. (Fojas 01 a 14 de autos). -----
2. El once de marzo de dos mil dieciséis, se dictó Acuerdo de Inicio de Investigación, en el que ordenó practicar las diligencias e investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y en su caso, emitir la resolución del Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de quien o quienes resultaren responsables (foja 15 de autos). -----
3. El siete de abril de dos mil dieciséis, se emitió Acuerdo de Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario, por considerar la existencia de elementos suficientes para instruir a la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, quien en la época de los hechos se desempeñaba como Directora de Organización y Normatividad, dependiente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ordenando llevar a cabo el desahogo de la Audiencia de Ley prevista en la fracción I del artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. (Fojas 37 a 41 de autos). -----





Expediente: CI/SSP/D/056/2016

4. Con fecha trece de abril de dos mil dieciséis, se emitió el oficio citatorio número **CG/CISSP/JUDQAC/445/2016**, mediante el cual se notificó de manera personal el veinte de abril de dos mil dieciséis, a la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, en el que se le hizo saber la presunta responsabilidad que se le imputaba, el lugar, día y hora en que tendría verificativo la audiencia de ley, su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho conviniera, por sí o por medio de un defensor, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 64 fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, apercibiéndosele que en caso de no comparecer sin causa justificada, el día y hora a la audiencia de referencia, se haría constar dicha situación y se llevaría la misma sin su asistencia, lo anterior en términos de lo previsto por el artículo 87 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la ley antes mencionada. (fojas 42 a 46 de autos). -----

5. El día veintiocho de abril de dos mil dieciséis, a las trece horas con treinta minutos, se llevó a cabo en esta Contraloría Interna el desahogo de la Audiencia prevista en el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con la comparecencia de la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, en la cual hizo las manifestaciones que estimó convenientes, ofreció pruebas y formuló alegatos respecto de la imputación que se le atribuyó, dándose por concluida dicha diligencia. (Fojas 51 a 55 de autos). -----

Por lo anterior, esta Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad Pública, considerando que no existe diligencia o prueba pendiente por desahogar en el procedimiento administrativo disciplinario del expediente **CI/SSP/D/056/2016**, procede a emitir la resolución definitiva que en derecho corresponde y, -----

CONSIDERANDOS

I.- Esta Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, es competente para conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 108 primer párrafo y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1º fracción III, 2º, 3º fracción IV, 47, 49, 57, 60, 64, 65, 68, 91, 92 párrafo segundo y demás aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 1, 3 fracción VIII, 15 fracciones X y XV, 17, 34 fracción XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 3 fracción I, 7 fracción XIV numeral 8, así como los artículos 9 y 113 fracción X y XXIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y Políticas de actuación Séptima y Novena del "ACUERDO POR EL





Expediente: CI/SSP/D/056/2016

QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES”, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en fecha veintisiete de mayo de dos mil quince. -----

II.- Para mejor comprensión del presente asunto, es oportuno hacer un análisis de los hechos controvertidos apoyándose en la valoración de todas las pruebas que obran en el expediente en que se actúa, conforme a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, a fin de resolver si la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, es o no responsable de la falta administrativa que se le atribuye, para lo cual debe acreditarse en el caso concreto, los siguientes supuestos: **A.** Determinar su calidad de servidora pública en la época en que sucedieron los actos u omisiones que se le atribuyeron como irregulares, y **B.** Que los actos u omisiones en que incurrió constituyan una violación a las obligaciones establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

Para efectos de lo anterior, los elementos de prueba relacionados con el asunto de mérito serán valorados conforme a las reglas que para tal efecto prevé el Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ello por disposición expresa del artículo 45, del último ordenamiento mencionado, que establece: -----

“Artículo 45.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, se atenderán, en lo conducente, las del Código Penal.” -----

De igual manera, sustenta lo anterior el criterio jurisprudencial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: II.1o.A. J/15, Materia Administrativa, Novena Época, Tomo: XI, Mayo de 2000, página 845, que a continuación se invoca: -----

“LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES, LA LEGISLACIÓN SUPLETORIA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA, ES EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 DE DICHA LEGISLACIÓN Y NO EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. De lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se desprende que en los casos no previstos por dicha ley en el procedimiento administrativo de responsabilidades, se aplicarán supletoriamente





las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Penales y en lo conducente, el Código Penal Federal; por ende, si en dicho procedimiento se aplicó supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, ello es inexacto y violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales."

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 193/99. Rosa Isela Hidalgo Baca. 10 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Mónica Saloma Palacios.

Amparo directo 293/99. Francisco Galán Granados. 10 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baraiibar Constantino. Secretaria: Blanca Isabel González Medrano.

Amparo directo 649/99. Javier Heredia Pineda. 24 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Clemente Delgado Salgado.

Amparo directo 404/99. Rebeca Martínez Juárez. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Cleotilde Juvenalia Meza Navarro, secretaria de tribunal en funciones de Magistrada, en términos del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Amparo directo 511/99. Alfredo Espinoza Carrera. 9 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Cleotilde Juvenalia Meza Navarro, secretaria de tribunal en funciones de Magistrada, en términos del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Jorge C. Arredondo Gallegos.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 1001, tesis I.4o.A.305 A, de rubro: "SERVIDORES PÚBLICOS, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS."

A. Por cuanto hace al primero de los supuestos consistentes en la calidad de servidora pública de **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, se acredita de la siguiente manera: -----

a).- Con el oficio número **SSP/OM/DGAP/003558/2016** de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, firmado por el Licenciado **RODOLFO DE LA O HERNÁNDEZ**, Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, mediante el cual remitió a esta Contraloría Interna información de la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, entre ella, la situación laboral Activa, última





Expediente: CI/SSP/D/056/2016

Adscripción Dirección de Organización y Normatividad, cargo Directora de Área "B", tipo de funciones Administrativas, visible a foja 19 de autos del presente expediente. -----

Documento que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280, 281 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicado de manera su supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por disposición expresa del artículo 45 del segundo ordenamiento en mención, al haber sido emitida por servidor público en ejercicio de sus funciones, con la que se acredita que el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, remitió información de la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, tal como, la situación laboral Activa, ultima Adscripción Dirección de Organización y Normatividad, cargo Directora de Área "B", tipo de funciones Administrativas. -----

b).- Con el oficio número **SSP/OM/DGAP/005072/2016** de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, signado por el Licenciado **RODOLFO DE LA O HERNÁNDEZ**, Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, mediante el cual remitió a esta Contraloría Interna, copia certificada de constancia de nombramiento de personal, a favor de la servidora pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, en la que se refiere a la citada servidora pública con el cargo Directora de Área "B", visible a foja 49 de autos del presente expediente. -----

Documento que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280, 281 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicado de manera su supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por disposición expresa del artículo 45 del segundo ordenamiento en mención, al haber sido emitida por servidor público en ejercicio de sus funciones, con la que se acredita que el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, remitió copia certificada de constancia de nombramiento de personal, de la servidora pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, en la que se refiere a la citada servidora pública con el cargo de Directora de Área "B". -----

c).- Con la copia certificada del documento denominado Constancia de Nombramiento de Personal, descripción del movimiento "Alta de Nuevo Ingreso", de la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, con fecha de vigencia dieciséis de noviembre de dos mil quince, en la que refiere que la citada servidora pública ostenta el cargo de Directora de Área "B", visible a foja 50 de autos del presente expediente. -----





Documento que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280, 281 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicado de manera su supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por disposición expresa del artículo 45 del segundo ordenamiento en mención, al haber sido emitida por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, con la que se acredita que el Director de Recursos Humanos y la Subdirectora de Movimientos de Personal, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, suscribieron dicho documento a favor de la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, con el cargo de Directora de Área "B". -----

En ese sentido, de acuerdo con el valor y alcance probatorio de los medios de convicción señalados y considerando que el valor probatorio de un medio de convicción se surte cuando reúne los requisitos exigidos por la ley, en tanto que su alcance o eficacia probatoria implica que además de tener valor probatorio, sea conducente y demuestre los hechos que con él se pretendan comprobar, resulta que dada la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural que debe existir entre la verdad conocida y la que se busca, esta Contraloría Interna aprecia en recta conciencia el valor de cada uno de los medios de convicción antes mencionados, concatenándolos en su conjunto para acreditar que la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, en la época en que se suscitaron los hechos que presuntamente se le atribuyen, es decir, que del dieciséis de noviembre de dos mil quince, se desempeñaba como Directora de Área "B", en la Dirección de Organización y Normatividad de la Secretaría de Seguridad Pública, acreditándose la calidad de servidora pública. -----

Se arriba a lo anterior, en virtud que al concatenarse todas y cada una de las documentales pública detalladas en los párrafos que anteceden, alcanzan valor probatorio pleno, en términos de los numerales 280, 281 y 290 del citado Código Procesal Penal; por ende, resultan suficientes para acreditar que la incoada se ubica dentro de los supuestos que establece el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se desempeñaba como Directora de Área "B", en la Dirección de Organización y Normatividad de la Secretaría de Seguridad Pública, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil quince, en el cual se ubicó la presunta irregularidad que se le imputa. -----

Por lo antes expuesto, los elementos antes descritos se consideran suficientes para que esta resolutoria determine su alcance probatorio, llegando a la plena convicción que la calidad de servidora pública de la incoada, ha sido acreditada; esto es así, toda vez que debe considerarse como servidor público, a la persona que desempeñe cualquier empleo, cargo o comisión de





cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Robustece dicha consideración, el siguiente criterio jurisprudencial: -----

"SERVIDORES PÚBLICOS, COMPROBACIÓN DEL CARÁCTER DE. Para acreditar el carácter de servidores públicos de los acusados, no es la prueba documental, correspondiente a sus respectivos nombramientos, la única para demostrar el elemento a que se refiere el artículo 222, fracción I del Código Penal Federal, sino que basta que por cualquier medio conste, de manera indubitable, que se está encargando de un servicio público.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 44/86. Respicio Mejorada Hernández y Coagraviados. 10 de marzo de 1986, unanimidad de votos: Raúl Murillo Delgado. Octava época. Instancia: Tribunales Colegiados del Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XIV-Septiembre. Tesis: X. 1°. 139L. Página: 288". -----

Por lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, resulta ser sujeto del régimen de responsabilidades de los servidores públicos a que se refiere el ordenamiento mencionado. -----

B. Ahora bien, se procede a acreditar el segundo de los supuestos mencionados, consistente en comprobar que la presunta irregularidad que se le atribuye a la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, constituye transgresión a las obligaciones previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, quien se desempeñaba en el momento de ocurridos los hechos como Directora de Área "B", en la Dirección de Organización y Normatividad de la Secretaría de Seguridad Pública, misma que se le hizo del conocimiento a través del oficio citatorio para audiencia de ley número **CG/CISSP/JUDQAC/445/2016**, de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, el cual fue notificado personalmente el día veinte del mismo mes y año, irregularidad que se hizo consistir en lo siguiente: -----

*"...presuntamente omitió dar cumplimiento a lo establecido en la Política **Quinta** del Acuerdo por el que se Fijan Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que se Señalan, para Cumplir los Valores y Principios que Rigen el Servicio Público y Para Prevenir la Existencia de Conflicto de Intereses, en el término previsto en el Lineamiento **PRIMERO párrafo segundo** de los Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración del Distrito Federal y Homólogos que se Señalan; ello, en*





Expediente: CI/SSP/D/056/2016

virtud de que ingresó a laborar a la Secretaría de Seguridad Pública, el día 16 del mes de noviembre del 2015, con el cargo de Directora de Organización y Normatividad y no presentó dentro de los 30 días naturales siguientes a su ingreso al servicio público, la declaración de intereses que señalan los ordenamientos antes mencionados, lo que consecuentemente implicó el incumplimiento a lo señalado en la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

Para establecer la presunta irregularidad de mérito, respecto de la obligación prevista en el artículo 47 fracción XXII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta autoridad considera lo dispuesto en los artículos 206, 280, 281, 285, 286 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de conformidad con el numeral 45 de la ley en cita, por lo que esta Contraloría Interna estima que en la especie, la probable responsabilidad que se le atribuye a la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, se desprenden de los siguientes elementos, mismos que serán analizados y valorados en el momento procesal oportuno. -----

1.- Copia certificada del oficio **SSP/OM/DERC/241/2016** de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, signado por la Maestra **HILDA ARACELI CHÁVEZ MEJÍA**, Directora Ejecutiva de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual remite la relación de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, obligados a presentar la declaración de intereses. -----

2.- Manifestación realizada en Audiencia de Investigación, celebrada en esta Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad Pública, el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en la cual la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, respecto del cumplimiento de la obligación de presentar la declaración de intereses, refirió: -----

*"... **MANIFESTO:** EL DÍA DE LA FECHA PRESENTE POR OFICIA DE PARTES DE ESTA CONTRALORÍA INTERNA EL OFICIO **SSP/OM/DEDOAT/DOyN/0186/2016** DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, A TRAVÉS DEL CUAL PRESENTO COPIA SIMPLE DE MI DECLARACIÓN DE INTERESES DE FECHA VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, CON LA FINALIDAD DE DAR ESTRICTO Y CABAL CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL OFICIO **CG/CISSP/JUDQAC/334/2016** DE FECHA DIECIOCHO DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. DESEANDO AGREGAR QUE OFREZCO UNA DISCULPA A ESTA AUTORIDAD POR NO HABER PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA DICHA DECLARACIÓN, SIN EMBRAGO, NO LA PRESENTE POR HABER EXTRAVIADO MI CONTRASEÑA PARA ACCESAR AL SISTEMA DE LAS DECLARACIONES. Y EN LO SUCESIVO SERÉ MÁS CUIDADOSA EN LOS PLAZOS*





Expediente: CI/SSP/D/056/2016

SEÑALADOS. SIENDO TODO LO QUE DESEO MANIFESTAR, ...". (sic), diligencia que obra a fojas 22 a la 24 de autos. -----

III.- Una vez descritos los elementos de prueba que forman parte integrante del expediente en estudio, se procede a analizar los argumentos de defensa esgrimidos por la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, así como a estudiar y valorar las pruebas y alegatos, en su caso, aportados por ella, a efecto de estar en condiciones de determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa, de acuerdo a la naturaleza de la irregularidad que se le atribuyó. ---

1.- Con fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo en esta Contraloría Interna el desahogo de la Audiencia prevista en el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con la comparecencia de la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, en la que esencialmente señaló lo siguiente: -----

----- **MANIFIESTA** -----

"...RATIFICO EN TODAS Y EN CADA UNA DE SUS PARTES LO MANIFESTADO EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, CON RELACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INTERESES. SIENDO TODO LO QUE DESEA MANIFESTAR." (SIC) -----

Por lo anterior, es dable tomar en consideración lo manifestado por la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, ante esta Contraloría Interna en la Audiencia de Investigación de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en la que indicó: -----

"... **MANIFESTO**: EL DÍA DE LA FECHA PRESENTE POR OFICIA DE PARTES DE ESTA CONTRALORÍA INTERNA EL OFICIO **SSP/OM/DEDOAT/DOyN/0186/2016** DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, A TRAVÉS DEL CUAL PRESENTO COPIA SIMPLE DE MI DECLARACIÓN DE INTERESES DE FECHA VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, CON LA FINALIDAD DE DAR ESTRINGIDO Y CABAL CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL OFICIO **CG/CISSP/JUDQAC/334/2016** DE FECHA DIECIOCHO DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. DESEANDO AGREGAR QUE OFREZCO UNA DISCULPA A ESTA AUTORIDAD POR NO HABER PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA DICHA DECLARACIÓN, SIN EMBRAGO, NO LA PRESENTE POR HABER EXTRAVIADO MI CONTRASEÑA PARA ACCESAR AL SISTEMA DE LAS DECLARACIONES. Y EN LO SUCESIVO SERÉ MÁS CUIDADOSA EN LOS PLAZOS SEÑALADOS. SIENDO TODO LO QUE DESEO MANIFESTAR...". (sic), diligencia que obra a fojas 22 a la 24 de autos. -----





Las anteriores manifestaciones de la servidora pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, resultan inoperantes para desvirtuar la conducta irregular que le fue imputada y hecha del conocimiento mediante el oficio citatorio número **CG/CISSP/JUDQAC/445/2016** de 13 de abril de 2016, en razón que el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, durante el desahogo de la audiencia de la misma fecha levantada ante esta Contraloría Interna, la servidora pública encausada, ratificó en todas y cada una de sus partes lo manifestado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, con relación a la presentación de la declaración de intereses, en la que esencialmente manifestó: *"PRESENTO COPIA SIMPLE DE MI DECLARACIÓN DE INTERESES DE FECHA VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, CON LA FINALIDAD DE DAR ESTRICTO Y CABAL CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL OFICIO CG/CISSP/JUDQAC/334/2016 DE FECHA DIECIOCHO DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. DESEANDO AGREGAR QUE OFREZCO UNA DISCULPA A ESTA AUTORIDAD POR NO HABER PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA DICHA DECLARACIÓN, SIN EMBRAGO, NO LA PRESENTE POR HABER EXTRAVIADO MI CONTRASEÑA PARA ACCESAR AL SISTEMA DE LAS DECLARACIONES..."* (sic) en tal virtud, lo único que se desprende es que pretende justificar la conducta irregular que se le atribuyó, situación que no lo exime de la obligación de observar las disposiciones legales aplicables a los servidores públicos, respecto a la presentación oportuna de la declaración de intereses, que en la especie correspondía presentarse dentro de los 30 días naturales siguientes a su ingreso al servicio público, sin que pase desapercibido que ingresó a laborar a la Secretaría de Seguridad Pública, el dieciséis de noviembre de dos mil quince, teniendo como plazo para presentarla del 1° de noviembre al 1° de diciembre de 2015, situación que no aconteció en la especie. -----

Sin embargo, es de indicar que tales manifestaciones constituyen el reconocimiento expreso del hecho atribuido a la servidora pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, por lo que esta autoridad les concede pleno valor probatorio y con alcance suficiente para acreditar que no presentó dentro de los 30 días naturales siguientes a su ingreso al servicio público, la Declaración de Intereses; lo anterior en términos de los artículos 279 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, atento a lo previsto por el numeral 45 de la Ley en cita, ya que fueron hechas por la propia servidora pública, persona capacitada para obligarse, con pleno conocimiento de la imputación hecha en su contra a través del oficio citatorio **CG/CISSP/JUDQAC/445/2016** de 13 de abril de 2016, sin que haya mediado algún tipo de coacción o violencia, en relación a hechos propios, en su declaración en la audiencia que dispone el artículo 64, fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el procedimiento administrativo de responsabilidades que se le instaura. ---





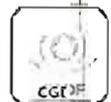
En tal virtud, resulta aplicable por analogía la Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII-Diciembre, Página 857, que indica: -----

“DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).- Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa.”

Asimismo, sirve de apoyo la Tesis III-TASR-II-58, visible en la Revista del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, Año XI. No. 121., Enero Mil Novecientos Noventa y Ocho, Tercera Época, página 125, del siguiente rubro: -----

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- LO QUE DEBE ENTENDERSE POR PRIMERA DECLARACIÓN RENDIDA POR LOS.- Conforme al artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la primera declaración formulada por el servidor público es la que debe considerarse de acuerdo al principio de inmediatez, toda vez que es la realizada en la audiencia a que se refiere la fracción I del artículo 64 mencionado, en la cual el servidor público al que se le atribuye una responsabilidad administrativa, puede ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor. Por tanto, si en una resolución administrativa que se emite para destituir e inhabilitar a un servidor público, se considera que, atendiendo al principio de inmediatez, las primeras declaraciones son las que tienen mayor valor porque al momento de rendirse, los declarantes no se encuentran asesorados por persona alguna, y que con base en una declaración formulada con anterioridad a la de la audiencia referida, se determina la responsabilidad administrativa, dicha resolución es ilegal, puesto que conforme al artículo 64 aludido y al principio de inmediatez mencionado, la primera declaración lo es la de la audiencia de ley, con la que se inicia el procedimiento administrativo en materia de responsabilidades de los servidores públicos y no la declaración anterior a dicho procedimiento, rendida en un procedimiento distinto al de la materia.”

Ahora bien, a las anteriores manifestaciones se les otorga el carácter de indicio, según lo establecido en el artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicado de manera supletoria por disposición del artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siendo que del análisis a las mismas, debe decirse que éstas no le benefician, toda vez





Expediente: CI/SSP/D/056/2016

que con ellas reconoce que no presentó su declaración de intereses en el periodo que debía hacerlo, por haber extraviado su contraseña para acceder al sistema de las declaraciones y que la presentó hasta que esta Contraloría le enteró que debía presentarse a aclarar o informar lo de su declaración de intereses misma que presentó hasta el veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, exhibiendo copia simple de ella, la cual existe en el expediente a fojas veintinueve a treinta y cuatro, ahora bien, considerando que la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, ingresó a laborar como Directora de Organización y Normatividad dependiente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el dieciséis de noviembre de dos mil quince, debió dar cumplimiento a la obligación de presentar su declaración de intereses como lo establece la Política **Quinta** del *Acuerdo por el que se Fijan Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que se Señalan, para Cumplir los Valores y Principios que Rigen el Servicio Público y Para Prevenir la Existencia de Conflicto de Intereses*, prevé que *“Todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que ocupen puestos de estructura u homólogos por funciones, ingresos o contraprestaciones, salvo el personal de base, conforme a los formatos, plazos, mecanismos y demás formalidades que establezca la Contraloría General, deberán declarar las relaciones pasadas, presentes o potenciales con personas físicas o morales, de carácter familiar, profesional, personal, laboral, o de negocios, incluyendo los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal responsable de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, susceptibles de ser favorecidos, beneficiados, adjudicados con motivo del ejercicio de las atribuciones que les confieren los ordenamientos jurídicos y administrativos. También deberá declarar lo correspondiente al cónyuge, a la persona con quien vive en concubinato, en sociedad en convivencia o dependiente económico”*; dicha obligación debió ser atendida por el incoado en el periodo del dieciséis de septiembre al dieciséis de octubre de dos mil quince, conforme al Lineamiento **PRIMERO párrafo segundo** de los *Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración del Distrito Federal y Homólogos que se Señalan*, que establece *“La persona que ingrese a un puesto de estructura u homólogo deberá presentar declaración de intereses dentro de los 30 días naturales a su ingreso al servicio...”*; por lo que dicha declaración debió presentarse en el periodo referido, situación que no aconteció en la especie, ya que de las manifestaciones realizadas y de la documental exhibida por la incoada, se advierte que con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, presentó la declaración de intereses correspondiente, es decir, con más de tres meses posteriores al plazo en que debió cumplirlo. -----





Ahora bien, respeto a lo indicado en el sentido que había extraviado su contraseña para acceder al sistema de las declaraciones, resulta inoperante por insuficiente para desvirtuar la conducta irregular imputada, en virtud que lo único que pretende es auto eximirse de la responsabilidad que se le atribuyó, al indicar que no presentó su declaración en tiempo y forma dicha declaración por haber extraviado su contraseña, sin que pase desapercibido que el hecho que haya extraviado su contraseña es una cuestión imputable única y exclusivamente a su persona, ello en virtud que el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, claramente establece las diversas obligaciones de los Servidores Públicos durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, siendo dicho ordenamiento legal de observancia obligatoria y de orden público, razón por la cual no resulta procedente manifestar que no la presentó en tiempo y forma por haber extraviado su contraseña, manifestaciones que no resultan procedentes para desestimar la legalidad de la conducta irregular imputada. En tales condiciones, es claro que en el presente asunto la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, incumplió lo dispuesto por el precepto legal en mención y ahora pretende justificar su omisión argumentando que la declaración no la presentó por cuestiones meramente imputables a ella, tal situación no sirve de excusa o excepción para que sus actos u omisiones no sean considerados como irregulares, de ahí lo inoperantes de sus manifestaciones para desvirtuar la conducta irregular imputada. -----

2.- Una vez expuesto lo anterior, se procede a valorar las pruebas que fueron ofrecidas por la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, en la audiencia de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, prevista en el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para lo cual debe precisarse que ofreció como prueba de su parte la documental que exhibió en la audiencia de investigación, la cual consiste en la siguiente: -----

1) Documental consistente en impresión del Acuse de Recibo Electrónico de la Declaración de Intereses de veintitrés de marzo del dos mil dieciséis. -----

Documental que se considera un indicio y se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 206, 285, 286 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por disposición expresa del artículo 45 del último ordenamiento legal. -----

Por cuanto hace al alcance probatorio de la documental mencionada, se desprende que el citado acuse fue expedido por la Contraloría General, vía correo electrónico, a favor de la servidora pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, al momento de presentar por dicho medio su declaración de intereses, el veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, desprendiéndose de lo anterior, que dicha





Expediente: CI/SSP/D/056/2016

declaración fue presentada fuera del plazo establecido para ello, toda vez que ingresó a laborar a la Secretaría de Seguridad Pública, el 16 de noviembre de 2015, con el cargo de Directora de Organización y Normatividad de la Secretaría de Seguridad Pública, sin que la hubiese presentado dentro de los 30 días naturales siguientes a su ingreso al servicio público, la referida declaración de intereses que señalan los ordenamientos mencionados, es decir, del dieciséis de noviembre al dieciséis de diciembre de dos mil quince, presentándola hasta el veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, esto es con más de tres meses posteriores al referido plazo, valoración que tiene su fundamento en el artículo 290 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

En ese contexto, la documental de mérito no le arroja beneficio a la interesada, en virtud que la declaración cuya omisión se le atribuyó, debió presentarla en los 30 días naturales siguientes a su ingreso al servicio, conforme a lo dispuesto en la Política **Quinta** del *Acuerdo por el que se Fijan Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que se Señalan, para Cumplir los Valores y Principios que Rigen el Servicio Público y Para Prevenir la Existencia de Conflicto de Intereses*, prevé que *"Todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que ocupen puestos de estructura u homólogos por funciones, ingresos o contraprestaciones, salvo el personal de base, conforme a los formatos, plazos, mecanismos y demás formalidades que establezca la Contraloría General, deberán declarar las relaciones pasadas, presentes o potenciales con personas físicas o morales, de carácter familiar, profesional, personal, laboral, o de negocios, incluyendo los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal responsable de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, susceptibles de ser favorecidos, beneficiados, adjudicados con motivo del ejercicio de las atribuciones que les confieren los ordenamientos jurídicos y administrativos. También deberá declarar lo correspondiente al cónyuge, a la persona con quien vive en concubinato, en sociedad en convivencia o dependiente económico"*; dicha obligación debió ser atendida por la incoada del dieciséis de noviembre al dieciséis de diciembre de dos mil quince, en el término previsto en el Lineamiento **PRIMERO párrafo segundo** de los *Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración del Distrito Federal y Homólogos que se Señalan*; que establecen que dicha declaración debió presentarse dentro de los 30 días naturales siguientes a su ingreso al servicio público, toda vez que quedó plenamente acreditado que ingresó a laborar a la Dirección de Organización y Normatividad de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el día dieciséis del mes de noviembre de dos mil quince, con el cargo Directora de Área "B". -----





Sirven de apoyo a todo lo anteriormente señalado de manera análoga, la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Civil, Fuente: Apéndice, Tomo IV, Novena Época, Página: 113, del rubro siguiente: -----

INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO.- *El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo.*
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

3.- Ahora bien, en vía de **ALEGATOS** la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA** manifestó en la audiencia de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, prevista en el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, visible de la foja 46 a la 54 de autos, que: -----

"REFIERE: SE CONSIDERE LA PRESENTACIÓN DE MI DECLARACIÓN DE INTERESES QUE PRESENTE DE MANERA EXTEMPORÁNEA, COMPROMETIÉNDOME A PRESENTAR LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EN TIEMPO Y FORMA, NO EVADO MI OBLIGACIÓN, SIN EMBARGO PEDIRÍA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO, SIENDO TODO LO QUE DESEO MANIFESTAR" (SIC). -----

En ese contexto, debe decirse que a las manifestaciones de la implicada se les otorga el carácter de indicio, según lo establecido en el artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por disposición de su artículo 45, siendo que de ella se advierte su aceptación expresa, sobre la omisión de dar cumplimiento en tiempo, a la obligación de presentar su declaración de intereses, razón por la cual éstas no le benefician, toda vez que con ellas reconoce que no presentó su declaración de intereses en el periodo que debía hacerlo, ya que supuestamente extravió su contraseña para acceder al sistema de las declaraciones, situación que como quedó establecido





en párrafos que anteceden, ello sólo es imputable a la servidora pública de referencia, por lo que sus alegaciones resultan inoperantes para desestimar la conducta irregular imputada. -----

IV.- Para acreditar la irregularidad atribuida a la servidora pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, respecto de la obligación prevista en la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se toma en cuenta lo dispuesto en los artículos 206, 280, 281, 285, 286 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 45 de la Ley en cita, por lo que esta Contraloría Interna, estima que en la especie la responsabilidad que se atribuye al servidora pública de referencia, se acredita con la adminiculación y concatenación de los siguientes elementos de prueba y convicción. -----

1.- Copia certificada del oficio **SSP/OM/DERC/241/2016** de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, signado por la Maestra **HILDA ARACELI CHÁVEZ MEJÍA**, Directora Ejecutiva de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual remite la relación de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, obligados a presentar la declaración de intereses. -----

Documental pública, que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicable en forma supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al ser expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas. -----

Por cuanto hace al alcance probatorio de la documental mencionada, se desprende fehacientemente que la **Maestra HILDA ARACELI CHÁVEZ MEJÍA**, Directora Ejecutiva de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Seguridad Pública, remitió a través del oficio en cuestión a esta Contraloría Interna, relación de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, obligados a presentar la declaración de intereses, dentro de la cual se señala a la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, en su carácter de Directora de Organización y Normatividad, dependiente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, como obligada a presentar declaración de intereses, valoración que tiene su fundamento en el artículo 290 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

2.- Manifestación realizada en Audiencia de Investigación, celebrada en esta Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad Pública, el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en la cual la





Expediente: CI/SSP/D/056/2016

Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, respecto del cumplimiento de la obligación de presentar la declaración de intereses, refirió: -----

"... **MANIFESTO:** EL DÍA DE LA FECHA PRESENTE POR OFICIA DE PARTES DE ESTA CONTRALORÍA INTERNA EL OFICIO **SSP/OM/DEDOAT/DOyN/0186/2016** DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, A TRAVÉS DEL CUAL PRESENTO COPIA SIMPLE DE MI DECLARACIÓN DE INTERESES DE FECHA VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, CON LA FINALIDAD DE DAR ESTRICTO Y CABAL CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL OFICIO **CG/CISSP/JUDQAC/334/2016** DE FECHA DIECIOCHO DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. DESEANDO AGREGAR QUE OFREZCO UNA DISCULPA A ESTA AUTORIDAD POR NO HABER PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA DICHA DECLARACIÓN, SIN EMBRAGO, NO LA PRESENTE POR HABER EXTRAVIADO MI CONTRASEÑA PARA ACCESAR AL SISTEMA DE LAS DECLARACIONES. Y EN LO SUCESIVO SERÉ MÁS CUIDADOSA EN LOS PLAZOS SEÑALADOS. SIENDO TODO LO QUE DESEO MANIFESTAR, ...". (sic), diligencia que obra a fojas 22 a la 24 de autos. -----

Manifestaciones a las que se les otorga el carácter de indicio de conformidad con los artículos 206 y 285 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores, por disposición expresa de su numeral 45 de la citada Ley --

Por cuanto hace al alcance probatorio de la documental mencionada, se desprende que la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, señaló que en el momento de los hechos presuntamente irregulares, se desempeñaba como Directora de Organización y Normatividad de la Secretaría de Seguridad Pública, y presentó la declaración de intereses el veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, acreditándose que no presentó dicha declaración dentro de los 30 días naturales a su ingreso al servicio, lo que aconteció el 16 de noviembre de 2015, corriendo el referido plazo del dieciséis de noviembre al dieciséis de diciembre de dos mil quince, valoración que tiene su fundamento en el artículo 290 del Código Federal de Procedimientos Penales aplicable supletoriamente. -----

En base a las consideraciones formuladas en los párrafos que anteceden, una vez analizadas en su conjunto todas y cada una de las declaraciones, constancias y demás documentales que integran el expediente en que se actúa, valorando en su justa medida los elementos de prueba que lo conformaron, sin perder de vista que el valor probatorio de un medio de convicción se surte cuando reúne los requisitos exigidos por la ley, en tanto que su alcance o eficacia probatoria implica que además de tener valor probatorio, sea conducente y demuestre los hechos que con él se pretendan comprobar; dada la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural que debe





Expediente: CI/SSP/D/056/2016

existir entre la verdad conocida y la que se busca, en uso de la facultad otorgada por el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicado de manera supletoria por disposición de artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta Contraloría Interna aprecia en recta conciencia el valor de todos y cada uno de los medios de convicción mencionados a lo largo de la presente resolución, adminiculándolos hasta poder considerarlos, en su conjunto, como prueba plena para acreditar la responsabilidad administrativa en que incurrió la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, por lo que esta Contraloría Interna, en mérito a los razonamientos lógico jurídicos expuestos a lo largo de la presente resolución, concluye que en el presente asunto, la responsabilidad administrativa atribuida a la persona de nuestra atención ha quedado confirmada, ya que al analizar el cúmulo de pruebas con las que cuenta esta autoridad, así como las ofrecidas por la implicada, en relación directa con los argumentos de defensa y alegatos expresados por la misma, hechos valer y que fueron valoradas de acuerdo a las pretensiones que fueron correlacionadas con cada uno de los razonamientos expuestos por la involucrada, no resultaron suficientes para desvirtuar la conducta irregular imputada. -----

V.- En mérito de lo anterior, esta autoridad se avoca a determinar si la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, con su omisión infringió lo dispuesto en la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para lo cual se realiza el siguiente análisis: -----

El artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dispone que: ---

"Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas...". -----

Por su parte la fracción XXII del citado precepto legal, establece que es una obligación de todo servidor público, el: -----

"XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público...". -----

(Énfasis añadido)

Al respecto, se considera que la anterior hipótesis normativa fue transgredida por la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, en virtud que ingresó a laborar a la Dirección





Expediente: CI/SSP/D/056/2016

Organización y Normatividad de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el día dieciséis del mes de noviembre de dos mil quince, con el cargo de Directora de Área "B", como quedó acreditado con el Constancia de Nombramiento de Personal, descripción del movimiento "Alta de Nuevo Ingreso", de la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**. Ahora bien, en el *Acuerdo por el que se Fijan Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que se Señalan, para Cumplir los Valores y Principios que Rigen el Servicio Público y Para Prevenir la Existencia de Conflicto de Intereses*, (Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015), se establece en la Política **Quinta** que: -----

"Todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que ocupen puestos de estructura u homólogos por funciones, ingresos o contraprestaciones, salvo el personal de base, conforme a los formatos, plazos, mecanismos y demás formalidades que establezca la Contraloría General, deberán declarar las relaciones pasadas, presentes o potenciales con personas físicas o morales, de carácter familiar, profesional, personal, laboral, o de negocios, incluyendo los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal responsable de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, susceptibles de ser favorecidos, beneficiados, adjudicados con motivo del ejercicio de las atribuciones que les confieren los ordenamientos jurídicos y administrativos. También deberá declarar lo correspondiente al cónyuge, a la persona con quien vive en concubinato, en sociedad en convivencia o dependiente económico" -----

De igual forma el Lineamiento **PRIMERO** párrafo segundo de los *Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración del Distrito Federal y Homólogos que se Señalan*, (Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2015), establece:

"... PRIMERO... Corresponde a todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que ocupen puestos de estructura u homólogos por funciones, ingresos o contraprestaciones, presentar durante el mes de mayo de cada año una Declaración de Intereses a efecto de manifestar sus relaciones pasadas, presentes o futuras con personas físicas o morales, de carácter familiar, profesional, personal, laboral, y de negocios; que con motivo del ejercicio de las atribuciones que les confieren los ordenamientos jurídicos y administrativos, puedan ser favorecidos, beneficiados, adjudicados con contratos, concesiones, permisos y demás procedimientos y actos..." -----

Párrafo segundo establece lo siguiente: -----





"La persona que ingrese a un puesto de estructura u homólogo deberá presentar declaración de intereses dentro de los 30 días naturales a su ingreso al servicio..."

Sin embargo, no lo hizo así, puesto que lo único que queda acreditado es que aseveró que la declaración de intereses fue presentada de manera extemporánea hasta el veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, como se acreditó con la manifestación realizada por la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA** en la audiencia de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, prevista en el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

Así las cosas, considerando que la implicada no se abstuvo de incumplir la obligación que le imponen los ordenamientos antes invocados, los cuales constituyen una disposición jurídica relacionada con su servicio, al disponer obligaciones para los servidores públicos, resulta justificado que infringió lo señalado en la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues quedo acreditando conforme a derecho que la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, debió de observar lo dispuesto en el artículo 47 en su fracción XXII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el contenido en el *Acuerdo por el que se Fijan Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que se Señalan, para Cumplir los Valores y Principios que Rigen el Servicio Público y Para Prevenir la Existencia de Conflicto de Intereses y con los Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración del Distrito Federal y Homólogos que se Señalan, no obstante, omitió hacerlo como quedo demostrado con las constancias detalladas y valoradas en líneas anteriores.* -----

VI.- El espíritu de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es suprimir la práctica de conductas y omisiones de cualquier tipo, ya sea de las disposiciones de dicha Ley Federal, de los mandatos dictados en torno a ella ó de cualquier otra disposición que debe ser observada por los servidores públicos con motivo del servicio que prestan en las dependencias o entidades de este Gobierno, por lo que una vez que se determinó la existencia de la irregularidad administrativa atribuida a la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, esta autoridad procede a realizar el análisis de los elementos que establece el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de imponer a la citada persona la sanción que conforme a derecho corresponda, para lo cual se procede a insertar a la letra, todos y cada uno de los elementos que se estudian, conforme a lo siguiente: -----





“Artículo 54.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos: -----

*Fracción I.- La **gravedad** de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella”;*

(Énfasis añadido)

Cabe referir que respecto a la **gravedad de la conducta**, es preciso señalar dicho dispositivo normativo no establece parámetro alguno que coaccione su análisis, de lo que se colige que esta autoridad administrativa cuenta con apoyo de todo lo actuado, así como con la facultad de determinar la gravedad de la responsabilidad en que incurrió la incoada; lo anterior conforme a la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Agosto de 1999, página 800, que al tenor literal reza: -----

SERVIDORES PÚBLICOS, GRAVEDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS.

El artículo 54 fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala entre otros elementos para imponer sanciones administrativas, la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la propia ley o las que se dicten con base en ella, sin que especifique qué tipo de conducta puede generar una responsabilidad grave, esto es, el referido precepto no establece parámetros que deban respetarse para considerar que se actualiza tal situación. Por tal motivo, si la autoridad que sanciona a un servidor público no señaló tales parámetros, no incumple con el requisito a que alude tal numeral, pues de su redacción no se advierte que se imponga esa obligación a la autoridad sancionadora, por lo que queda a su criterio el considerar qué conducta puede ser considerada grave.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 7697/98. Mario Alberto Solís López. 6 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretaria. Flor del Carmen Gómez Espinoza.”





En esa tesitura, respecto a la **gravedad de la conducta**, es preciso señalar que si bien la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no señala una graduación de la gravedad de las conductas transgresoras de la ley de referencia, sin embargo, considerando el actuar irregular en que incurrió la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, en su carácter de Directora de Organización y Normatividad, dependiente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, lo cual ha quedado debidamente acreditado en párrafos precedentes y que consistió en que: -----

*"omitió dar cumplimiento a lo establecido en la Política **Quinta** del Acuerdo por el que se Fijan Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que se Señalan, para Cumplir los Valores y Principios que Rigen el Servicio Público y Para Prevenir la Existencia de Conflicto de Intereses, en el término previsto en el Lineamiento **PRIMERO párrafo segundo** de los Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración del Distrito Federal y Homólogos que se Señalan; ello, en virtud de que ingresó a laborar a la Secretaría de Seguridad Pública, el día 16 del mes de noviembre del 2015, con el cargo de Directora de Organización y Normatividad y no presentó dentro de los 30 días naturales siguientes a su ingreso al servicio público, la declaración de intereses que señalan los ordenamientos antes mencionados."*

Tal y como quedó acreditado en líneas precedentes, la servidora pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, infringió con su omisión lo establecido en la fracción **XXII** del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al no presentar su declaración de intereses no salvaguardó la legalidad que debía ser observada en el desempeño de su cargo; por ello, resulta ineludible la necesidad de erradicar prácticas que infrinjan en cualquier forma, las disposiciones de la ley o de las que se dicten con base en ella, procurando evitar conductas y omisiones que contravengan disposiciones de orden público como lo es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; no obstante, esta resolutoria toma en consideración que la servidora pública de mérito, si bien no cumplió con su obligación de presentar su declaración de intereses en el periodo establecido por la norma, esta refiere que sí la presentó en fecha **veintitrés de marzo de dos mil dieciséis**, sin que así lo hubiese acreditado, además de que con dicha omisión no ocasionó algún daño o perjuicio en el servicio público inherente a dicho cargo, en consecuencia se estima, que la omisión en que incurrió **no es grave**; no obstante a ello, la comisión de la conducta irregular por parte de la servidora pública quedó debidamente acreditada en autos y por lo tanto subsiste la misma, siendo necesario la imposición de alguna sanción que inhiba en un futuro este tipo de prácticas por parte de la servidora pública en comento, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública. -----





Fracción II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;

Las circunstancias socioeconómicas de la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, de conformidad con las constancias de nombramiento de personal así como de las demás que existen en autos, la ahora responsable durante la comisión de los hechos que se les atribuyen, percibía un ingreso mensual líquido en la Secretaría de Seguridad Pública de **\$55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M. N.)**; con [REDACTED] años de edad, con instrucción escolar de [REDACTED], originaria de la [REDACTED], estado civil [REDACTED] atendiendo a dichas circunstancias, se estima que las mismas no incidieron en la omisión en que incurrió la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**. Lo cual en el presente caso, en nada justifica su actuar. -----

Fracción III: El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del servidor público”.

El nivel jerárquico, los antecedentes y condiciones de la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, de conformidad con la declaración vertida por la ahora responsable durante su desahogo de Audiencia de Ley esta se desempeñaba como Directora de Organización y Normatividad de la Secretaría de Seguridad Pública, con un ingreso mensual líquido de **\$55,000.00 pesos mensuales**; con instrucción escolar de [REDACTED] con una antigüedad en el servicio público de **veinte años** aproximadamente, que no cuenta con antecedentes de sanción lo que se confirma con el oficio **CG/DGAJR/DSP/2331/2016** de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Licenciado **MIGUEL ÁNGEL MORALES HERRERA**, Director de Situación Patrimonial de la Contraloría General del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) visible a foja 63, por lo que, es de considerar que ocupaba un puesto estructura que la obligaba a presentar su declaración de intereses en tiempo y forma como quedó acreditado en autos, aunado a que contaba con la antigüedad y experiencia suficiente en el servicio público para actuar con apego al marco normativo que rige el servicio público, atendiendo a estas circunstancias, se estima que se encontraba obligada a cumplir con la presentación de declaración de intereses, siendo necesario la imposición de una sanción administrativa que inhiba este tipo de prácticas, con independencia de su nivel jerárquico y no contar con antecedentes de sanción y las condiciones del infractor no influyen, ni justifican la comisión de la conducta que se reprocha, por lo que resulta necesario imponer una sanción administrativa con el fin de inhibir en el futuro la práctica de este tipo de conducta. -----

Fracción IV: Las condiciones exteriores y medios de ejecución”.





Las condiciones exteriores y los medios de ejecución de los hechos irregulares cometidos por la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, hay que señalar que por cuanto hace a las condiciones exteriores, éstas nos permiten determinar la intencionalidad utilizada en la comisión de la irregularidad; al respecto, señalaremos que aún sin que se aprecie la preparación de determinados medios para realizar la conducta irregular, si es conveniente resaltar que mucho menos se detectan probables elementos exteriores ajenos a la voluntad de la servidora pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, que hubieran influido de forma relevante en la comisión de la misma, si bien es cierto, no existió la intencionalidad deliberada en la conducta para omitir conducirse con estricto apego a derecho, también lo es, que existió una deficiencia en su servicio derivada de su conducta que como servidor público debió cumplir, situación que es completamente reprochable, al efecto debe decirse que ese grado de reprochabilidad por el que se le sanciona, se originó en razón de que se apartó de su obligación de presentar su declaración de intereses dentro de los 30 días naturales a su ingreso al servicio, con motivo de su cargo, sin que exista una causa exterior que justifique su actuación, en contravención a las obligaciones que como servidor público debía cumplir, aunado a la aceptación de la omisión en que incurrió, por lo que infringió lo dispuesto en la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de lo que se desprende que su conducta contravino la normatividad que rige su actuar; de lo expuesto, esta Contraloría Interna llega a la firme convicción de que no se advirtió la existencia de alguna condición exterior que influyera en el servidor público involucrado para realizar la conducta irregular que se le atribuye, ya que es injustificable su proceder. -----

Ahora bien, en cuanto a los medios de ejecución como se ha señalado con anterioridad, de autos se apreció que se ubicó en circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que su imagen tenga una marcada falta de probidad en su desempeño como servidora pública; sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, el criterio sustentado por nuestro máximo Tribunal en la Tesis: 392, con los siguientes precedentes; Séptima Época, Instancia: Cuarta Sala, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo V, parte SCJN, Página 260, cuyo rubro y texto son: -----

“PROBIDAD U HONRADEZ, FALTA DE CONCEPTO. Por falta de probidad u honradez se entiende el no proceder rectamente en las funciones encomendadas, con mengua de rectitud de ánimo, o sea, apartarse de las obligaciones que se tienen a cargo, procediendo en contra de las mismas; debe estimarse que no es necesario para que se integre la falta de probidad u honradez que exista un daño patrimonial o un lucro indebido, sino sólo que se observe una conducta ajena a un recto proceder.” -----

Fracción V: La antigüedad en el servicio”.





La antigüedad en el servicio de la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, cuenta con **veinte años** de antigüedad aproximadamente en el servicio público, sin embargo dicha antigüedad no debe ser condicionante para que al momento en que una persona se desempeñe como servidor público tenga excusa de cumplir con todas y cada una de las obligaciones que el propio cargo y la Ley obligan, aunado que al momento de ocurridos los hechos motivo del presente procedimiento administrativo, en efecto contaba con **veinte años** de antigüedad aproximadamente lo que le permitía conocer sus obligaciones como servidor público, y toda vez que quedó acreditada la conducta irregular en que incurrió la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, es necesario la imposición de alguna sanción que inhiba este tipo de prácticas por parte de la servidora pública en comento perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública.

Fracción VI: La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones

Respecto a la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, Al respecto, cabe precisar que la reincidencia en los procedimientos administrativos de responsabilidad se actualiza cuando un servidor público ha sido sancionado con anterioridad por la comisión de la misma irregularidad. En el caso particular de la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, no se actualiza la figura de la reincidencia, como se acredita con el oficio número **CG/DGAJR/DSP/2331/2016**, de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, signado por el Licenciado **MIGUEL ÁNGEL MORALES HERRERA**, Director de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal ahora Ciudad de México, mediante el cual informó que no se localizó a esa fecha registro de sanción de la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, consecuentemente no cuenta con antecedentes de haber sido sancionada, por lo que se determina que la servidora pública en comento no es reincidente en incumplimiento de las obligaciones que le confiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las leyes, reglamentos y ordenamientos legales relacionados con ellos.

Fracción VII: El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones

En relación con la presente fracción, se toma en consideración que derivado de la irregularidad en que incurrió, no se desprende que la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, haya obtenido algún beneficio económico, o causado un daño o perjuicio al Erario Público de la Ciudad de México.





VII.- En virtud de los considerandos que anteceden y tomando en cuenta los hechos narrados, los razonamientos expresados, así como los elementos a que se refiere el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad Pública, procede a determinar la sanción a que se ha hecho acreedora la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, por la omisión en que incurrió en su carácter de Directora de Organización y Normatividad, dependiente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, y que constituye una violación a las obligaciones establecidas en los ordenamientos legales señalados en el cuerpo de la presente resolución. -----

Asimismo y atendiendo a los razonamientos expuestos, esta autoridad toma en consideración que la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, no cuenta con antecedentes de sanción administrativa, que no ocasionó un daño patrimonial a la Dirección de Organización y Normatividad de la Secretaría de Seguridad Pública, que la irregularidad atribuida ha sido calificada como **no grave**, atendiendo a que omitió dar cumplimiento a lo establecido en la Política Quinta del *Acuerdo por el que se Fijan Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que se Señalan, para Cumplir los Valores y Principios que Rigen el Servicio Público y Para Prevenir la Existencia de Conflicto de Intereses*, en el término previsto en el **Lineamiento PRIMERO párrafo segundo** de los *Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración del Distrito Federal y Homólogos que se Señalan*; ello, en virtud de que ingresó a laborar a la Secretaría de Seguridad Pública, el día dieciséis del mes de noviembre de dos mil dieciséis, con el cargo de Directora de Área "B", y no presentó dentro de los 30 días naturales a su ingreso al servicio, la declaración de intereses que señalan los ordenamientos antes mencionados, tal y como ya quedó acreditado anteriormente, omisión con la que incumplió con la obligación prevista en la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

Esta autoridad también toma en consideración que la imputada cuenta con un nivel socioeconómico y profesional que le permitía conocer que debía apegarse a la normatividad cuya omisión se le atribuyó, máxime que cuenta con estudios de Licenciatura, por lo cual, estaba en aptitud de conocer que debía observar las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público señalados con antelación por lo que contaba con los conocimientos suficientes en relación a las obligaciones que debía de cumplir como Directora de Organización y Normatividad de la Secretaría de Seguridad Pública; de igual forma, debe decirse que la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, al incurrir en la irregularidad que ha sido previamente descrita, debía realizar su declaración de intereses, en el plazo legalmente establecido para ello,





que en lo futuro deje de hacer determinada cosa, respecto de su desempeño en su empleo, cargo o comisión en el servicio público. -----

En esta tónica, a consideración de esta Contraloría Interna y atendiendo a los elementos que prevé el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, analizados en líneas que anteceden, que la conducta desplegada por la servidora pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, no se consideró grave y no se registran antecedentes de sanción en el cumplimiento de las obligaciones de la Administración Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), sí tenía la obligación de presentar la declaración de intereses dentro de los 30 días naturales a su ingreso al servicio, como una obligación inherente al servicio público, y no lo hizo, aunado a lo anterior, es importante mencionar que la hoy incoada se encontraba obligada a presentar la declaración de intereses, del 16 de noviembre al 16 de diciembre de dos mil quince, tiempo suficiente para dar cabal cumplimiento a la normatividad que ya fue motivo de estudio en párrafos precedentes, por lo que una **AMONESTACIÓN PRIVADA**, sería la adecuada por la conducta desplegada por la incoada. -----

Del mismo modo, al considerarse como no grave la conducta imputada a la servidora pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, se excluye la posibilidad de imponerle como sanción la Suspensión, Destitución o Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, consecuentemente, esta autoridad considera que para corregir el ejercicio de una obligación que se produjo en el ámbito del servicio público y buscando un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que se imponga, para que ésta no resulte inequitativa, la sanción a imponer debe ser una Amonestación Privada, conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 53, del Ordenamiento legal en cita. -----

En virtud de los razonamientos expresados, así como los elementos a que se refieren los artículos 53 y 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta Contraloría Interna considera que con base en todos los razonamientos lógico jurídicos expresados en el cuerpo de esta resolución, determina que la conducta de la servidora pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, transgredió lo dispuesto en la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que esta Contraloría Interna impone a la servidora pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, con fundamento en el artículo 53 fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como sanción administrativa la consistente en una **AMONESTACIÓN PRIVADA**, sanción que deberá ser aplicada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----





No debe pasar por alto, que las consideraciones de esta resolución administrativa, no sólo se limitan a acreditar la responsabilidad administrativa de la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, sino que para que los actos de autoridad gocen de certeza jurídica, deberán estar debidamente fundados y motivados de conformidad con lo ordenado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, la sanción administrativa impuesta a la incoada, se considera justa y equitativa, toda vez que quedó plenamente acreditado que incurrió en incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al desempeñarse como Directora de Organización y Normatividad, dependiente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. -----

Por lo antes, expuesto y fundado, es de resolverse y se: -----

----- **RESUELVE** -----

PRIMERO. Esta Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad Pública, es competente para conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver el presente asunto, conforme a lo señalado en el Considerando I del presente instrumento jurídico. -----

SEGUNDO. La Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, es administrativamente responsable de haber infringido las obligaciones previstas en la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

TERCERO. Se impone a la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, la sanción administrativa consistente en UNA AMONESTACIÓN PRIVADA, con fundamento en lo previsto en la fracción II del artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

CUARTO. Notifíquese la presente resolución a la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64 fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para los efectos a que haya lugar. -----

QUINTO. Remítase copia con firma autógrafa de la presente resolución al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, al Director General de Administración de Personal, al Director Ejecutivo de Organización y Administración Territorial, como





Expediente: CI/SSP/D/056/2016

su jefe inmediato y al Director General de Asuntos Jurídicos de la misma dependencia, a efecto que tenga pleno conocimiento de la misma y giren las instrucciones necesarias a quien corresponda, de acuerdo con la fracción II del artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y se proceda a aplicar la sanción administrativa impuesta a la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**. -----

SEXTO.- Remítase copia con firma autógrafa de la presente resolución al titular de la Dirección de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, a efecto que se inscriba a la Servidora Pública **JENNIFER MONJARAZ BUTANDA**, en el Registro de Servidores Públicos Sancionados. -----

SÉPTIMO. Una vez realizadas las diligencias ordenadas en el presente instrumento jurídico, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. -----

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EN ESTA FECHA EL LICENCIADO JAIME ALBERTO BECERRIL BECERRIL, CONTRALOR INTERNO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. -----

IRS/JRD/MAHG/PHH.

